
LA CRISIS EN MÉXICO SALDOS Y OPCIONES*

Por Carlos Tello

En 1982 terminó en México el breve periodo de rápida expansión de la economía que se había iniciado cuatro años antes. Durante ese año, en unos cuantos meses, el entusiasmo por la segunda versión del milagro mexicano proclamado por muchos —dentro y fuera del país— a partir de los descubrimientos de las enormes reservas de hidrocarburos, y su subsecuente explotación, se desvaneció a un ritmo inusitado. Hoy, después de casi cuatro años de retroceso, los viejos y los nuevos problemas económicos y sociales de la nación se presentan acumulados y de enormes magnitudes y le dan al presente la apariencia de un callejón sin salida.

Después de registrar un crecimiento económico particularmente alto durante cuatro años consecutivos, muy por encima del promedio mundial y desde luego mayor al de los otros países de América Latina, en 1982 —por primera vez en los últimos cincuenta años— la economía mexicana dejó de crecer. En tanto que durante 1978-1981 la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB), en términos reales, fue de casi 8.5% en promedio al año (la tasa promedio más alta para un periodo equivalente en lo que va de este siglo), en 1982 el valor real del PIB disminuyó en un 0.5%, respecto al que tenía en 1981, lo que equivale a una disminución de 3% en el producto por persona del país.

No sólo no hubo en 1982 crecimiento económico en México. Además, una serie de acontecimientos económicos y sociales se combinaron de tal forma durante ese año que la nación encaró una encrucijada sin paralelo en su historia reciente.

Su recuento permite formarse una idea del alcance y profundidad de la problemática de aquel año: la formación in-

terna de capital prácticamente se suspendió en 1982, después de cuatro años consecutivos de crecimiento acelerado de la inversión pública y privada; los precios de las mercancías y de los servicios aumentaron a un ritmo sin precedente desde los años de la lucha armada en el país y 1982 terminó con una inflación de cerca de 100%; los salarios reales descendieron a un nivel inferior al de 1976 y el desempleo abierto de la mano de obra pasó del 5% del total de la fuerza de trabajo en los primeros meses de ese año, a más del 10% en los últimos meses. Así, a finales de 1982, prácticamente la mitad de la fuerza de trabajo en México estaba desempleada o subocupada. Lo mismo sucedía con las fábricas y sus equipos. Muchas y muy importantes empresas del sector privado enfrentaron muy serias dificultades financieras —no así sus dueños— y varias de ellas quebraron o fueron absorbidas por otras empresas, con frecuencia extranjeras; una buena parte de las que durante el periodo del auge habían contratado crédito con la banca comercial extranjera suspendieron los pagos del servicio de su deuda externa (notablemente, el grupo industrial ALFA que era el grupo privado nacional más importante en el país). Por su parte, las finanzas públicas se deterioraron aceleradamente: el déficit del sector público, que durante los primeros años del periodo 1978-1982 se había mantenido en torno al 7.5% del PIB, llegó a cerca del 15% en 1981 y al 18% en 1982, y muchas de las empresas del sector público también tuvieron que enfrentarse a muy serios problemas financieros.

En las relaciones económicas de México con el exterior el deterioro también fue notable y acelerado. A la reducción de precio del petróleo a mediados de 1981 siguieron otras más en 1982 y se sumaron, durante esos años, la disminución de la demanda mundial por otros productos que el país exporta así como la caída de sus precios, a causa de la depresión

* Este ensayo forma parte de una colección de trabajos que Héctor Aguilar Camín y Pablo González Casanova han coordinado y que, con el título *México ante la crisis*, publicará Siglo XXI editores próximamente.

económica mundial iniciando, por lo demás, una tendencia al descenso en los precios de las materias primas prácticamente independiente del crecimiento de los países industrializados. A ello se añadió un aumento considerable en las tasas de interés de los muy cuantiosos préstamos que el país tenía contratados, multiplicando con ello los pagos que por este concepto se tenían que hacer al exterior. Asimismo, las empresas extranjeras que operaban en el país aceleraron el ritmo de remisión de sus utilidades a sus países de origen.

En 1981 y en 1982 la especulación monetaria en México adquirió características apocalípticas y la fuga de capitales nacionales alcanzó montos inusitados. El peso monetario se devaluó en varias ocasiones y el tipo de cambio de la moneda aumentó de 25 a 150 pesos por dólar entre febrero y diciembre de 1982. Entre tanto, el servicio de la deuda pública con el exterior —la cual creció muy aceleradamente a partir del

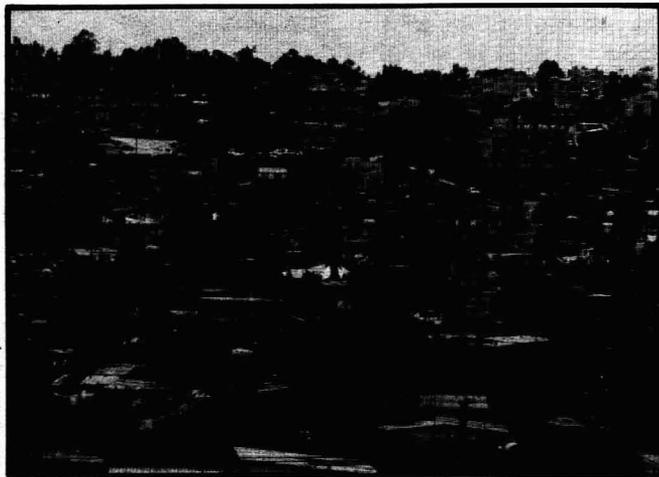


Foto: Rodolfo Lazoya

segundo semestre de 1981, en parte para hacerle frente a la fuga de capitales del país que la política de libre e irrestricta convertibilidad de la moneda permitía— se hizo cada vez más difícil. La banca comercial extranjera, que había prestado al país en 1981 más de 22 mil millones de dólares en términos netos sólo le prestó en 1982 seis mil millones y, a partir de julio de ese año, suspendió sus créditos a México por considerarlos demasiado riesgosos. En agosto de 1982 México suspendió el servicio de su deuda externa, al agotarse las reservas monetarias internacionales en el Banco de México, lo que precipitó una crisis bancaria y financiera con repercusiones mundiales en la que todavía hoy en día —en agosto de 1985— más que vislumbrar el principio de su fin, apenas se ha asistido al fin de su principio. En ese mismo mes de agosto de 1982, para obtener divisas que tanto urgían, se acudió al gobierno de los Estados Unidos pero éste, como respuesta, impuso duras condiciones a la venta anticipada de petróleo que México tuvo que hacerle para su reserva estratégica.

Coincidiendo con el proceso de la sucesión presidencial, durante 1981 y 1982, pero de manera creciente, los rumores sustituyen a la de por sí escasa información; las presiones del gobierno de los Estados Unidos aumentan, en buena medida como resultado de la política que México adopta en los conflictos de Centro América, y los ataques al gobierno —articulados y promovidos por grupos del sector privado— se aceleran y multiplican, responsabilizándolo de la crítica situación que México vivía. En un esfuerzo para recuperar el control de la política financiera en el país —y en general de la política económica— el primero de septiembre de 1982 se decretó

la nacionalización de la banca privada y se estableció el control generalizado de cambios, evitándose de esta manera un colapso aún más grave en la economía y sociedad mexicana. En buena medida como resultado de ello, las relaciones entre el sector privado y el gobierno —que se habían empezado a resentir a partir del segundo semestre de 1981— alcanzaron su punto más álgido desde la segunda mitad de la década de los años treinta, durante el gobierno del presidente Cárdenas, y el concepto mismo de economía mixta se puso en entredicho.

Ese fue el escenario del inicio del gobierno del presidente de la Madrid. No era la primera vez que la transmisión de poderes en el país se daba en condiciones difíciles. De hecho, esta fue la tercera ocasión consecutiva en que el cambio de gobierno ocurrió en circunstancias críticas.

Doce años antes, Luis Echeverría asumió la Presidencia de la República, en diciembre de 1970, en el marco abierto por los acontecimientos de 1968. Si bien entonces el país no encaraba un peligro inminente en materia económica, era claro que algunas relaciones políticas fundamentales se habían resentido profundamente y, sobre todo, que a México se le planteaba con urgencia la necesidad de cambios de fondo en su vida económica y social. La violencia y la represión en que el país se debatió entre 1968 y 1971 no eran fenómenos esporádicos sino expresaban, tal vez de modo desproporcionado, serios desajustes en el cuerpo político y la estructura económica nacional. La idea y la conciencia de la crisis hicieron en esos años un firme acto de presencia y se inició en México un accidentado periodo de cambios, de intentos por encauzarlos desde el Estado y de crecientes conflictos económicos y sociales. Seis años después, en diciembre de 1976, a José López Portillo le tocó asumir el poder ejecutivo dentro del colapso económico y financiero más grave de la postguerra y en medio de una confrontación ideológica con el sector privado de la cual el gobierno salió mal librado. Nunca antes de ese año la lucha por encauzar y organizar la evolución económica y social del país, a partir de diferentes proyectos y concepciones sobre el futuro, había sido más abierta y enconada. El auge espectacular que siguió al primer año del gobierno del presidente López Portillo sólo en apariencia resolvió los conflictos y los problemas económicos que habían presidido su principio. Desde los últimos meses de 1981 y, sobre todo, a fines de 1982, todos los tiempos y ritmos del acontecer social desembocaron en una sola, aunque compleja dimensión: la de la crisis.

“La situación —advirtió el presidente de la Madrid al tomar posesión de su cargo el primero de diciembre de 1982— es intolerable. No permitiré que el país se deshaga en nuestras manos”.

No era para menos. A las expectativas inciertas propiciadas por la inflación y la devaluación desmesurada que tuvo lugar a lo largo de 1982, se agregaba la certeza de que en adelante las divisas “seguras” del petróleo tendrían que dedicarse casi por entero a pagar los intereses de la deuda externa contratada hasta ese momento, con el agravante de que, al menos para el futuro previsible, no había ninguna probabilidad de que el capital nacional fugado al exterior volviera al país en una magnitud significativa. Parecía claro, además, que las fracturas en el esquema de economía mixta que había provocado la nacionalización de la banca eran profundas y que, lo que era peor, buena parte de los empresarios se inclinaban a abandonar la actividad productiva y,

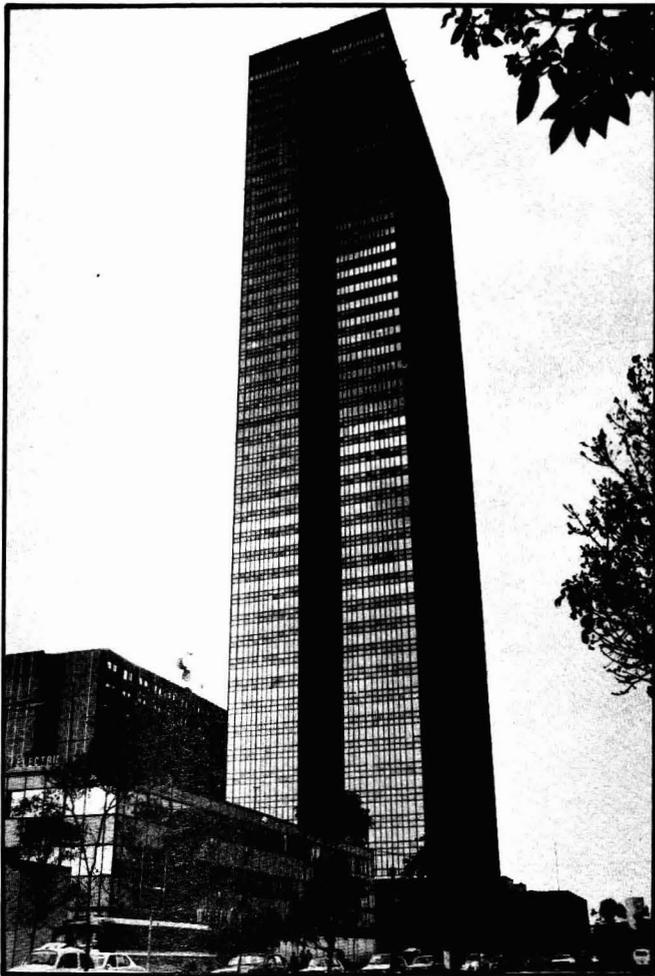


Foto: Rodolfo Lozoya

en general, la promoción de empresas a cambio de la especulación financiera, o de plano la emigración económica.

Por su parte, el Estado encaraba su propia crisis financiera en una proporción superampliada y sus posibilidades de sustituir los huecos que estaba creando la retirada masiva del sector privado eran prácticamente nulas, o por lo menos así se las veía desde el gobierno. En ello coincidía una parte sustancial del “espíritu público” mexicano, que de manera más acusada que en 1976 sin mayor reflexión y análisis se mostraba dispuesto a pasarle al Estado la cuenta por los platos rotos.

A finales de 1982 parecía haber consenso en México sobre la gravedad de la crisis. Las apreciaciones de optimismo ligero que se hicieron a principios y mediados de ese año, en el sentido de que lo que sucedía era un simple problema financiero, “de caja” como se le llamó entonces, dieron paso a partir de diciembre a un reconocimiento ominoso de que la crisis era estructural y de duración prolongada. El primero y más enfático en reconocerlo fue el nuevo gobierno. “El proceso de desarrollo, diagnosticaba el presidente de la Madrid en su primer *Informe de Gobierno*, se había paralizado y se habían deteriorado las bases para lograr mejoras en el bienestar de las mayorías e, incluso, para mantener los niveles ya logrados. Enfrentábamos no sólo una crisis circunstancial, sino una de carácter estructural que rebasaba el ámbito económico, al darse también manifestaciones de encono entre diferentes sectores sociales, que implicaban un cuestionamiento de nuestros principios rectores y, en algunos grupos, de la organización misma de la Nación”.

Para hacerle frente a esta profunda y compleja crisis el go-

bierno del presidente de la Madrid promueve el *Programa Inmediato de Reordenación Económica* (PIRE), para superarla a corto plazo, y el *Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988* (PND), para simultáneamente promover una estrategia de cambio estructural que le dé solidez y estabilidad al crecimiento económico a mediano plazo.

En la presentación que el Presidente de la República hace del PND se dice:

“No es posible enfatizar el cambio estructural sin resolver la crisis; los resultados serían efímeros. Tampoco debemos preocuparnos sólo por resolver la crisis sin incidir en los desequilibrios fundamentales que la generaron; ello la haría recurrente.

“La experiencia histórica muestra la necesidad de este propósito. En el país, cuando se ha intentado realizar cambios estructurales sin poner atención a los equilibrios fundamentales de corto plazo, el crecimiento ha sido inestable y los avances no han logrado permanencia. Por otra parte, cuando sólo se enfatizó la estabilidad, sólo se logró permanencia en el crecimiento, pero se perdió su sentido social al desatenderse las necesidades de cambio estructural. Por ello, la estrategia del Plan enfatiza simultáneamente el combate a la inflación y la protección del empleo, con el inicio de cambios cualitativos. Este es el rasgo singular de la estrategia de desarrollo: combatir simultáneamente las manifestaciones y las raíces de la crisis. Ello implica mayores dificultades, pero es una solución más firme y radical”.

En esta singular afirmación se hace una revisión apretada y crítica de la estrategia adoptada durante el periodo del llamado desarrollo estabilizador (que, en realidad, no logró permanencia en el crecimiento) y la que pusieron en práctica los dos gobiernos que le siguieron a partir de 1970 (que, por lo demás, nunca abandonaron por completo las políticas económicas de la década previa). Se plantea, además, el propósito fundamental de la política económica del actual gobierno: armonizar, combinándolos, el programa de estabilización macroeconómica de corto plazo, acordado con el Fondo Monetario Internacional, con el llamado cambio estructural de más largo plazo. Y, finalmente, se reafirma que, a diferencia de otras épocas, la estrategia adoptada ahora sí va a funcionar, ya que es la correcta, por lo que llevará al país a superar sus añejos y recientes problemas.

El principio general que articula el diagnóstico que se hace, la estrategia que se propone y la dirección que se establece en el uso de los instrumentos de política económica, en ambos documentos, es la confianza y el convencimiento de que los mecanismos de la libre operación del mercado y del sistema de precios son los adecuados para regular y distribuir eficientemente los recursos y combinar los factores de la producción en la sociedad. Se presupone que la intervención del Estado sólo ha distorsionado el funcionamiento que se estima normal de la economía y ha alejado a los mercados —el de bienes, el de factores, el de divisas— de su situación de equilibrio. Sin embargo, a diferencia de lo que ha sucedido en otras latitudes (por ejemplo, en los países del cono sur de América Latina), en el caso mexicano la confianza en los mecanismos del mercado no es ciega: no ha implicado la renuncia por parte del Estado a intervenir en el proceso de desarrollo económico. Por el contrario, en México —y en ello

reside lo novedoso del proyecto— “la actitud de la nueva administración en materia de política económica parece ser una de reconocimiento de la imposibilidad de dejar la fijación de los precios relativos al mercado, debido a las características institucionales de nuestra sociedad, al mismo tiempo que la intervención en ellos se dirige a lograr los resultados que arrojaría el mercado si éste funcionara sin intervención en un contexto institucional distinto. Esta suplantación de las funciones del mercado se realiza, en los mercados externo y de factores, a través de la intervención en la fijación de precios, y en el mercado de bienes, a través de la renuncia a la posibilidad de gastar por encima del ingreso que le confiere al Estado su posición institucional en la sociedad”.*

Se trata, en suma, de intervenir en los mercados de manera que éstos funcionen como si no hubiera intervención.

A pesar de todos los esfuerzos y la perseverancia con que se ha actuado, la política económica puesta en práctica por el gobierno en estos últimos años no ha tenido los resultados que de ella se esperaban. Los saldos de casi cuatro años de crisis económica y de política económica en México pueden resumirse en los siguientes puntos:

1. Entre 1982 y 1984 el PIB por persona en términos reales ha disminuído en alrededor de 10% y la incipiente recuperación económica que se da en los últimos meses de 1984 se agota antes de que termine el primer semestre del año en curso. Todo parece indicar que, en el mejor de los casos, el crecimiento del PIB durante 1985 apenas superará al de la población. Ello contrasta con las metas establecidas en el PND, que ya para este último año fijaba una meta de crecimiento real del PIB de entre 5 y 6%.

La caída en la actividad económica ha sido tan intensa que, tan sólo para que el PIB por persona a finales de la presente década recupere el nivel que ya había alcanzado a principios de ella, la tasa de crecimiento de la economía entre 1986 y finales de los ochenta debe ser de 5% anual. Todo ello para estar como se estaba diez años antes. Y lo que es aún más grave: esta modesta tasa de crecimiento del PIB en los años por venir no será fácil de alcanzar, pues no sólo las condiciones externas serán poco propicias sino que, además, las internas se ven cada vez más difíciles a causa de la política económica puesta en práctica durante estos últimos años.

2. Esta caída sin precedente en el ingreso de un país que durante más de cuarenta años sólo conoció el crecimiento ininterrumpido, ha estado acompañada de un aumento en la concentración del ingreso y de la riqueza. En estos años, el desempleo abierto ha pasado de alrededor del 5% a cerca del 15% de la fuerza de trabajo —más de tres millones y medio de personas en 1985— y el salario en términos reales ha disminuído cada año y en este año es apenas una fracción —el 65 %— del que era a principio de 1982. Por su parte, los propietarios de activos fijos y financieros —dentro y fuera del país— han multiplicado sus ingresos y su riqueza y las empresas reportan considerables aumentos en sus utilidades, muy por encima del incremento del índice general de precios. Así, más que avanzar hacia una sociedad más igualitaria —y ello es propósito fundamental del PND— se ha retro-

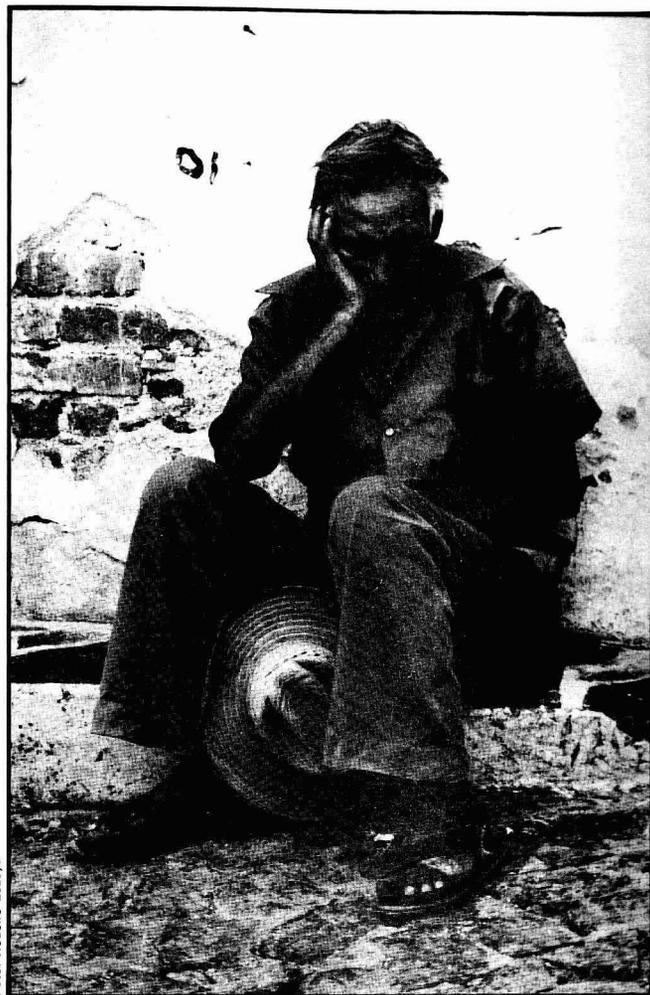


Foto. Rodolfo Lozano

cedido y el deterioro en la ya de entrada desigual distribución del ingreso ha afectado negativamente las condiciones generales de existencia de la mayoría de la población.

3. Más que combatir el rezago social y la pobreza —tal y como lo estipula el PND—, la política instrumentada en estos años ha contribuido a que aumente el porcentaje de la población nacional que no satisface de manera aceptable sus necesidades esenciales en materia de alimentación, educación, vivienda y salud. En estos años la calidad de la vida para grupos muy numerosos de la sociedad ha empeorado. Epidemias que se pensaban ya controladas han vuelto a reaparecer. Las autoridades dan cuenta continuamente de los crecientes índices de desnutrición de la población, especialmente la infantil, y de disminución en el volumen de alimentos básicos consumidos en los centros urbanos. El rezago en materia de vivienda ha crecido y el servicio de educación carece de recursos ante la creciente demanda. En suma, en estos años de retroceso económico y social han sido las mayorías populares las que han cargado con el peso del ajuste al que ha estado sometida la economía nacional y, con ello, las condiciones de existencia de la población se han deteriorado.

4. Lo mismo sucede con el capital fijo y la planta productiva del país. En cierto sentido el capital que el país ha acumulado se está echando a perder y, en algunos casos, tiene el peligro de volverse obsoleto sin nunca haber rendido todo lo que podía. La austeridad presupuestal ha significado, en muchos casos, que los gastos de conservación y manteni-

* José I. Casar, “La política económica del nuevo gobierno” que aparece en *Economía Mexicana*, núm. 5, Centro de Investigación y Docencia Económica México, 1983, p. 46.



Foto: Rodolfo Lozoya

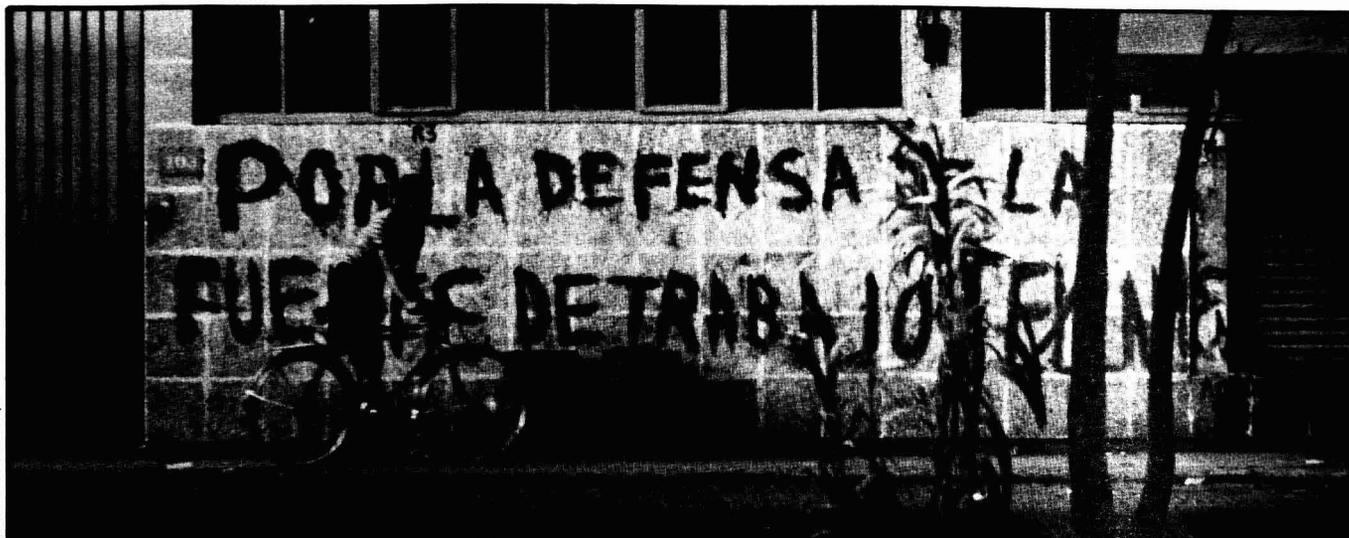
miento disminuyan en términos reales. Presas, carreteras y puertos se deterioran. Proyectos de infraestructura e industriales iniciados en otras épocas se suspenden y las disminuidas importaciones reducen la eficiencia del aparato productivo nacional. Inclusive hay equipos (tractores, embarcaciones, locomotoras) que están parados, sin poderse aprovechar a causa de los ajustes y recortes presupuestales y la insuficiencia de refacciones importadas. Además de las implicaciones que todo ello tiene en el corto plazo, el descuido del capital fijo y la planta productiva tiene repercusiones serias, muy costosas, en el mediano y el largo plazos.

5. La crisis fiscal del Estado subsiste en lo esencial y puede resumirse de la siguiente forma: frente a las necesidades básicas de la nación es muy poco lo que el sector público gasta y ese gasto reducido está inadecuadamente financiado. Argumentar, como con frecuencia se hace, que se ha reducido el déficit público y que ahora representa un porcentaje menor del producto no es suficiente evidencia de que se ha superado la crisis fiscal tal y como se lo proponían los programas del gobierno. Habría que ver lo que está detrás. La reducción sin concierto del gasto y el incremento en el precio de la gasolina explican buena parte de ese ajuste fiscal. En todo caso, ni una reforma tributaria ni una reforma presupuestal —requisitos fundamentales para superar la crisis fiscal— se ha planteado y, mucho menos, llevado a cabo. En cambio, se anuncian ventas de empresas públicas y se reduce el presupuesto autorizado para 1985 —ya de por sí austero— en tres ocasiones en un sólo semestre, para terminar

despidiendo a funcionarios y empleados del sector público. A todo ello no se le puede llamar reforma estructural, de fondo.

6. La crisis cambiaria también subsiste después de tres años de esfuerzos por recuperar lo que se llamó “la soberanía monetaria”. Las fugas del capital continúan y en 1985, como en otras épocas, el ánimo especulativo acabó con los esfuerzos gubernamentales que buscaban ordenar el mercado cambiario. Como en el pasado, este mercado opera en la actualidad en el sentido inverso a lo que se considera su comportamiento normal: mientras más altos son los rendimientos para los ahorros en pesos y más se acelera la devaluación de la moneda frente al dólar, menor es el deseo que hay por mantener saldos en pesos y mayor la demanda por divisas. Relajado el sistema de control de cambios desde diciembre de 1982, los especuladores han llevado el tipo de cambio del peso frente al dólar a niveles injustificados y, contra la política declarada, el tipo de cambio libre (o superlibre, como popularmente se le conoce) se ha separado del controlado. Ello afecta las expectativas inflacionarias, estimula la fuga de capitales y la venta de empresas nacionales al capital extranjero. De hecho, la situación cambiaria lleva a pensar en forma peligrosa que la mejor inversión es el dólar.

7. Problemas similares tiene la balanza de pagos del país. Los pagos por concepto de interés de la deuda externa absorben buena parte de las divisas generadas por la exportación de petróleo. Entre 1982 y 1985 se habrán pagado más de cuarenta mil millones de dólares por concepto de interés (más de la mitad del saldo de la deuda externa del país a finales de 1982) y el saldo de la deuda externa total ha crecido año con año. Se ha renegociado la deuda, pero el problema de fondo subsiste. No podía ser de otra manera. Las filiales de empresas extranjeras que operan en el país continúan remitiendo fuertes cantidades de utilidades a sus matrices, a pesar de la caída en el ritmo de actividad de la economía nacional. Ya hace tiempo que el país, a pesar de su pobreza, exporta capitales. En el intercambio de mercancías y de servicios tampoco las cosas marchan como se tenía previsto y programado. El petróleo continúa siendo la espina dorsal de las relaciones comerciales con el exterior y sus perspectivas no son nada alentadoras. Por lo demás, se llevan a cabo exportaciones no petroleras y se deja de importar cuando disminuye el ritmo de actividad económica en el país; cuando apenas se inicia una muy modesta recuperación de la economía, lo que antes se exportaba se empieza a consumir internamente y además aumentan las importaciones. Se demuestra con ello la naturaleza altamente dependiente de la planta productiva nacional y el carácter poco emprendedor y no persistente del exportador mexicano. Y todo ello a pesar de que el tipo de cambio pasó de 25 pesos por dólar en febrero de 1982 a más de 350 pesos por dólar a mediados de 1985. Para exportar hay que crecer. Por lo visto, no basta con devaluar o cambiar los precios relativos. Ahora se anuncia la apertura del mercado nacional a la competencia del exterior eliminándose los permisos de importación y estableciendo, en lugar de ellos, aranceles. ¿Con qué divisas se hará la importación? ¿con las controladas? Se habla también, y de nueva cuenta, de ingresar al GATT: a ese club de países ricos que hablan de liberar el comercio entre las naciones y lo



único que hacen es proteger cada vez más sus economías. Se afirma, optimistamente, que todo ello es un ajuste que sitúa al país en el camino de la modernización y que, además, ayudará a reducir las presiones inflacionarias.

8. La inflación aún persiste y, a pesar de que el ritmo del crecimiento del índice nacional de precios al consumidor ha disminuído, aún está por encima de lo previsto por el gobierno. En 1985 el comportamiento de los precios será muy similar al del año pasado y puede, inclusive, ser superior. La inflación ahora difícilmente puede ser atribuida a la evolución de los salarios monetarios. Tampoco puede atribuirse a excesos de gasto público, sobre todo cuando como en 1984 el incremento en el gasto sobre lo presupuestado se encuentra en el pago de interés de la deuda pública. Más que a los salarios y al gasto público los movimientos al alza de los precios se relacionan con las altas tasas de interés y el descontrol en el tipo de cambio. El afán por obtener ganancias rápidas (y a cualquier precio) hace el resto. La espiral es utilidades-precios y no otra. La falta de inversión neta durante estos años de crisis, alentará aún más las presiones inflacionarias en los años por venir.

9. De distinta naturaleza que lo anterior, pero sin duda alguna también muy importante, es la cuestión de la confianza de los inversionistas. A pesar de un sinnúmero de concesiones que se les han otorgado, el gobierno no recupera su confianza. No sólo el capital fugado en otras épocas no regresa sino que, además, ha continuado saliendo del país en estos tres años en que la política económica le ha sido particularmente favorable. Prácticamente no hay inversión privada y la extranjera, por más beneficios que obtiene, viene poco y más bien compra lo que existe. El gobierno ha cedido ante la presión del capital y, en lugar de que se lo agradezca, le reclama cada vez más y demanda reducir aún más el papel del Estado en la economía. A mayores concesiones, mayores demandas. El capital no está satisfecho. Quiere más y no sólo en el campo de lo económico. Ahora se lanza, con apoyo del exterior, a disputarle el poder al grupo gobernante. En esto tampoco el gobierno ha tenido los resultados que de sus políticas esperaba. Esto era de esperarse. Lo que en realidad sucede es que el concepto mismo de economía mixta entró en entredicho y las relaciones entre el sector privado y el gobierno, que en los últimos quince años han sido crecientemente

conflictivas, tuvieron una fractura fundamental al nacionalizarse la banca. Esa ruptura no se puede componer por la vía de las concesiones. Otro camino es necesario. Hay que avanzar.

A pesar de que el saldo de la política gubernamental deja mucho que desear, el gobierno del presidente de la Madrid insiste en señalar que el camino por el que se decidió es el correcto y propone más de lo mismo, pero más intenso. Se repite que no hay otro camino, pero sí lo hay. Uno que atienda más a los intereses nacionales, populares y democráticos de México.

Son muchos y de muy distinta especie los factores que tendrían que tomarse en cuenta en el diseño de una política alternativa a la planteada por el gobierno del presidente de la Madrid. En cualquier caso, se debe tener presente que en los próximos años es poco probable que el crecimiento de la economía sea acelerado. Inclusive lo más probable es que esté por debajo de la tasa de crecimiento que en promedio el país logró entre 1935 y 1982.

Es por ello que ahora la calidad del crecimiento importa mucho más que en otras épocas. No se debe reanudar el proceso de expansión de la actividad económica para repetir las cosas. Pronto volveríamos a entrar en una crisis, pero más profunda. Lo que se ha agotado es un estilo de crecimiento: un proceso de expansión económica durante casi cincuenta años que, a pesar de lo mucho que se ha hecho, arroja un saldo no del todo favorable. Decenas de millones de mexicanos que no disfrutaban de una vida digna y segura son testimonio elocuente de ello. La creciente vulnerabilidad y dependencia externas del país; las deficiencias y las insuficiencias de la agricultura y la industria; un Estado sin recursos para atender las demandas económicas y sociales de la población y de los negocios, también lo atestiguan. Por ello hay que cambiar nuestro estilo de crecimiento. Hacer del crecimiento, desarrollo. Ello es difícil, pero necesario. No se va a lograr dejando las cosas y los problemas al mercado; tampoco forzando movimientos en los precios relativos. Mucho menos abriéndose al exterior. Desde luego que no hay fórmulas fáciles, sencillas, que den resultados ciertos a corto plazo. Nadie posee la verdad. Hay que discutir, confrontar. La necesidad de cambio es clara y se requieren respuestas que vayan a la raíz de los problemas. Un nuevo orden económico interno. No es el diseño de éste el propósito de este ensayo. Lo que aquí se plantea es apenas lo inmediato, lo urgente.

De entrada se tiene que tomar en cuenta que las perspectivas de crecimiento de la economía y comercio mundiales para los próximos años no son nada alentadoras. Tampoco son particularmente favorables las de los países con los que México tiene más intensas relaciones comerciales y financieras. La economía norteamericana ha dejado de crecer al ritmo que venía haciéndolo y muestra ya claros signos de debilitamiento. Si bien no hay que esperar ni descansar demasiado en el comportamiento de esa economía, sin duda la situación de país frontera puede beneficiar a México y a su proceso de expansión, pero sólo en la medida en que la economía nacional se fortalezca. También es poco probable que en los próximos años se repita un nuevo auge petrolero y mucho menos que el capital financiero de los países desarrollados transfiera recursos cuantiosos, ni siquiera significativos, a las economías como las nuestras, tal y como lo hizo en la década de los años setenta.

Limitados seriamente los estímulos del exterior hoy, más que en cualquier otra época desde la segunda postguerra, México tendrá que descansar en su propio esfuerzo, consciente de que su crecimiento económico —de darse— puede fácilmente tener un prematuro fin si es que no se reaniman también buena parte del resto de las economías con las que el país tiene relaciones. Apostar a un estilo de crecimiento que tenga como estímulo fundamental la exportación está condenado al fracaso. No hay que confundir la promoción de las exportaciones con un crecimiento a base de la exportación. Por lo demás, sólo con un mercado nacional vigoroso y en crecimiento se podrá acceder a los mercados del exterior, vendiendo lo que producimos.

Dentro de los factores internos habría que considerar que no existe, en buena medida, un sector empresarial entusiasta

y dispuesto a comprometer sus recursos de capital con el país y con su desarrollo futuro. Además la planta y el equipo productivo, que en general no es muy eficiente, se ha deteriorado como resultado de la crisis. A ello habría que agregar la relativa escasez de recursos de que dispone el gobierno para reiniciar, impulsándolo, el proceso de recuperación de la economía y el no muy eficiente desempeño de muchas de las entidades del sector público mexicano. Más que integrar un sector público productiva y financieramente articulado, las empresas públicas actúan como verdaderos feudos, lo que dificulta poner en marcha un programa de estímulo al resto de las actividades productivas.

A pesar de éstas y otras limitaciones al proceso de expansión de la economía nacional, las posibilidades de superar la crisis no están canceladas para México. Sin embargo, si es que se busca que el desarrollo en el país siga siendo posible, se requiere encarar, bajo una nueva perspectiva y desde luego, la cuestión de la deuda externa.

Para México, como para muchos otros países, es cada vez más difícil cumplir con el servicio anual de la deuda externa. No es posible, ni conveniente, continuar siendo flexibles en las metas de crecimiento y de bienestar y demandar mayores sacrificios al pueblo de México en aras del pago puntual de la deuda externa. Las restricciones que al uso de divisas y a las finanzas públicas impone el pago al exterior de los intereses y el capital son de tal magnitud que ya, en la actualidad, no sólo cancelan el crecimiento de la economía sino que también lo ponen en entredicho a mediano y largo plazos. Una nueva reestructuración de la deuda externa sólo en forma muy limitada aliviaría la situación sin resolverla. Lo que se requiere —y pronto— es encontrar, conjuntamente deudores y acreedores, una solución global al problema en el marco de un nuevo orden económico internacional. Por lo pronto se debe suspender (o reducir significativamente) el servicio de la deuda externa por un lapso de tres a cinco años. Y ello como requisito sin el cual el país difícilmente podrá iniciar su recuperación económica. No se trata, desde luego, de simple y sencillamente declarar unilateralmente una moratoria. Ello poco resolvería. Inclusive, por la acumulación de intereses no liquidados con oportunidad, podría empeorar la situación. Más bien lo que se busca es recuperar para el desarrollo una cantidad importante de recursos que en la actualidad, por la vía del servicio de la deuda, se está transfiriendo a los países desarrollados. Se debe actuar junto y en coordinación con los otros países deudores. Con la unidad, que da fuerza, y la fuerza de la razón se podrá negociar con los países acreedores. Ellos lo esperan. Desde 1982 se han estado preparando para el momento de la negociación. Saben muy bien que la solución no está en la continua sangría de las economías de los países deudores. Y la suspensión de pagos sólo como primer paso, que tendrá que estar acompañada posteriormente —ya en un ambiente de recuperación económica, que siempre ayuda a pensar mejor— por una reunión internacional que aborde la cuestión de las finanzas internacionales y los movimientos de capital y le dé una solución sensata, que evite en lo sucesivo caer de vuelta en lo mismo.

Estrechamente vinculada a lo anterior está la cuestión del control de cambios. Dada la escasez relativa de divisas y lo importante que son para promover el desarrollo nacional, es indispensable reforzar el control de cambios como fórmula para garantizar su uso prioritario y nacional. Como en las otras ocasiones (1975-1976, 1981-1982), en la actualidad



Foto. Rodolfo Loayza



Foto: Rodolfo Lazoya

—1985— la crisis se agudiza a raíz y a partir de la especulación con las divisas y la fuga de capitales. Ello no se debe permitir ya. Por el contrario, lo que se debe buscar es asegurar que las empresas en México —públicas y privadas— dispongan a precios competitivos de las mercancías, insumos y bienes de capital necesarios para su funcionamiento, para así fortalecer y vigorizar la planta productiva y facilitar su expansión orientada.

Los recursos presupuestales y las divisas liberadas al cancelar (o reducir en forma importante) el servicio de la deuda externa y la seguridad que da un mercado cambiario estable, no sujeto a la especulación, dará un margen de manobra y abrirá la posibilidad de articular y promover una política económica alternativa, más cercana a los intereses populares y nacionales.

Las propuestas de política para el desarrollo económico y social tienen que ofrecer respuestas a los problemas centrales de la crisis económica actual. Para ello, por lo menos los siguientes aspectos centrales de la política económica deben modificarse desde luego.

En primer lugar está la cuestión de los ingresos reales de los trabajadores. Continuar imponiendo límites a los aumentos salariales nominales no sólo es socialmente injusto sino que, además, es ineficiente desde un punto de vista económico. La contención salarial no ha mostrado ser muy eficaz como instrumento antiflacionario. En cambio, al disminuir la demanda, estrecha el mercado interno y reduce la producción y el empleo, al mismo tiempo que repercute negativamente en la estructura y orientación del aparato productivo. Lo que se requiere es un cambio en la política salarial y un aumento en la producción de bienes de consumo popular para que se recupere e incluso aumente el salario real, con revisiones más frecuentes de los salarios nominales y con una política vigorosa de salarios no monetarios (tien-

das sindicales y otras prestaciones) que en los momentos críticos de la historia nacional ha mantenido la estabilidad y la paz social.

En segundo lugar está la cuestión de la alimentación, la salud, la vivienda y la educación de las clases populares, especialmente los grupos marginados. Si algo resulta evidente después de más de cuarenta y cinco años de acelerada y sostenida expansión de la economía es que el crecimiento en México no ha producido desarrollo. El rezago que existe en materia de bienestar social es enorme. La crisis lo ha agravado. De ahí que se debe desplegar un esfuerzo considerable y de inmediato para aumentar la producción de bienes y servicios de consumo generalizado y masivamente distribuirlos a precios accesibles. Simultáneamente, es necesario formular —y llevar a la práctica— un programa masivo y eficiente que tenga como propósito mejorar las condiciones de salud y nutrición de los grupos de la población urbana y rural más necesitados.

En tercer lugar está la cuestión del campo. Más que cualquier otra cosa, lo necesario es una definición y acción clara, consistente y persistente por parte del Estado que, asumiendo plenamente la crisis de la sociedad rural, impulse con todos sus recursos la capacidad para producir de los campesinos; estimule la autosuficiencia en la producción de granos básicos; respete la organización campesina; impida que el desarrollo de la ganadería se haga a expensas de la agricultura y rescate para los campesinos una parte de los mecanismos de intermediación.

En cuarto lugar está la cuestión del gasto público y el estímulo al privado. Liberado de las restricciones que el pago de la deuda le impone, el gasto público sanamente financiado y selectivamente orientado tendrá que ser el apoyo en que descanse la recuperación de la economía. La capacidad productiva en prácticamente todas las ramas de la actividad está sub-utilizada por lo que con facilidad se puede acceder a mayores niveles de producción sin cuantiosas inversiones. La mayor demanda originada en los aumentos salariales y en el gasto público, junto con una política monetaria y crediticia que no inhiba a la inversión privada, permitirá al país crecer a un ritmo más acelerado. En materia de gasto público no es suficiente aumentarlo. Se requiere, sobre todo, elevar su eficiencia y productividad y sanear su financiamiento. Para ello es indispensable una profunda reforma presupuestal que, por lo menos, le dé mayor participación al poder legislativo en la formulación del presupuesto y en su elevación; fortalezca el pacto federal, para que en el diseño y ejecución del presupuesto participen más intensamente los gobiernos estatales y la población más directamente involucrada y, finalmente, incluya una reforma fiscal.

En quinto lugar está la cuestión de la política bancaria. Frente a la crisis la banca debe convertirse en un sistema de apoyo a la producción. Asumiendo los riesgos necesarios —y no descansando en las garantías que se otorguen— la banca debe proporcionar los recursos suficientes, a tasas reducidas de interés, para la expansión de la producción en actividades prioritarias y apoyando a las empresas públicas, privadas y sociales.

Para rescatar un desarrollo con un sentido popular y nacional es necesario abordar en la dirección apuntada las cuestiones planteadas. De otra suerte la política económica estará cada vez más alejada de los intereses populares y nacionales. ◇